


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Entidad originadora:	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Fecha (dd/mm/aa):	30 / 04 / 2026
Proyecto de Decreto/Resolución:	“Por el cual se reglamentan los numerales 4° y 5° del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023, se modifica y adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico y se dictan otras disposiciones”

1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN.

Colombia, como Estado parte de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, ha asumido compromisos que orientan su política hacia la garantía del acceso al agua como derecho fundamental. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas (2010) reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento como derechos humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 (ODS 6) de la Agenda 2030, suscrita por Colombia, establece la necesidad de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Este objetivo reconoce la necesidad de promover la gobernanza participativa del agua, fortaleciendo la participación de las comunidades locales en la gestión de los recursos hídricos.


Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados. A su vez, el artículo 366 de la Constitución Política establece que: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

De otro lado, la Constitución Política dispone en su artículo 8° la obligación tanto del Estado como de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y garantiza en su artículo 38 la libertad de asociación, de manera que, se habilita la conjunción de esfuerzos para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad; y que, con el fin de asegurar la universalidad de los servicios públicos, el inciso 2 del artículo 365 *ibidem*, habilita a las comunidades organizadas para prestar estos servicios.

Por su parte, el marco de reglamentación para el sector ambiente se rige a partir del Decreto-Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección”, el cual, en sus artículos 1° y 2° señala que, fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad, el Estado y los particulares deben participar en “la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional.”

Así mismo, el artículo 3° *ibidem* establece la regulación para el agua en cualquiera de sus estados. Adicionalmente, señala las formas en que se puede adquirir el derecho a usar los recursos naturales renovables que, para el caso del agua, salvo disposición en contrario solo pueden usarse en virtud de concesión. En línea con lo anterior, la Ley 99 de 1993 por medio de la cual “se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 23 del Título IV, indica

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, fueron creadas como las encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales. Es así, como las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, incluidas las autoridades urbanas y los establecimientos públicos ambientales, en el marco de los artículos 31 y 66 de dicha ley, son los responsables de los otorgamientos de concesiones, permisos y autorizaciones y licencias ambientales, para los cuales deben también ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental.


El Decreto 1076 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”* estipula en el Capítulo 2, Sección 1 las disposiciones generales para el uso y aprovechamiento de las aguas, con el objeto de cumplir con los objetivos establecidos en el artículo 2 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

Adicionalmente, la Sección 5 del Capítulo 2 *ibidem* establece los modos de adquirir el derecho al uso de las aguas y sus cauces de conformidad con el artículo 51 de Decreto – Ley 2811 de 1974, el cual indica que toda persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de dicho decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas en los casos establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.1 del mismo decreto. Asimismo, la Sección 7 relaciona las disposiciones comunes de las concesiones de aguas, incluyendo los fines para las cuales se requiere obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, haciendo hincapié en que el uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella y; además, las características y condiciones de las concesiones, se incluyen en la Sección 8. En adición, el artículo 2.2.3.3.2.2. define el uso del agua para consumo humano y doméstico que implica su utilización en actividades como: *“1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 3. Preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización o distribución, que no requieran elaboración.”*

Así mismo, en el Capítulo 4 *Ibidem* se desarrollan las disposiciones relativas al Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH), entre las cuales se destaca el parágrafo del artículo 2.2.3.4.1.1 que define el uso del agua para consumo humano y doméstico en viviendas rurales dispersas.

A su vez, la Ley 373 de 1997, *“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”*, fue reglamentada mediante el Decreto 1090 de 2018, compilado en el Decreto 1076 de 2015 y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua; entendiéndose el PUEAA como una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de este recurso. Es así como, los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.3.3.6.2 del mencionado decreto, disponen que la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas deberá ir acompañada del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

Ahora bien, el artículo 3° de la Ley 2294 de 2023 dispone los Ejes de Transformación del Plan Nacional de Desarrollo, entre los cuales se encuentra el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua que: *“Busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de planificación territorial participativos, donde las voces de las y los que habitan los territorios sean escuchadas e incorporadas.”*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

A su vez, el artículo 274 *ibidem* instó a las entidades del Gobierno Nacional a expedir una Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico y reconocer a los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico como sujetos de la economía popular y comunitaria y actores clave en el propósito de ordenar el territorio alrededor del agua. De manera particular, determina:

“ARTÍCULO 274. GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. La política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico deberá incluir, entre otros, los siguientes lineamientos necesarios para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico:

1. Las comunidades organizadas, no estarán sujetas a la inscripción y trámites ante las Cámaras de Comercio de que trata el Decreto 427 de 1996, o la norma que la modifique o sustituya, y serán consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, en los términos del artículo 23 del Estatuto Tributario. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales que determinen los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.

2. Para efectos del cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica, los inmuebles destinados a la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado por parte de estos gestores comunitarios que ofrecen sus servicios en área rural o urbana no serán sujeto de contribución, recibiendo el mismo tratamiento que los inmuebles residenciales estrato 4 o su equivalente. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales para determinar los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.

3. Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo a la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento.

4. Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1,0 litros por segundo (lps), no requerirán concesión de aguas; sin embargo, deberán inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Para esta excepción, se deben cumplir las siguientes condiciones: El uso del agua será exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas localizadas en el área urbana y, en el caso de las ubicadas en área rural, el uso será exclusivo para la subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentación.


Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua para uso doméstico con caudales entre 1,0 lps y 4,0 lps, no requerirán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), como tampoco la autorización sanitaria como prerequisite para el otorgamiento de la respectiva concesión.

5. Los proyectos de reúso de aguas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que cumplan con los criterios de calidad vigentes para el uso en actividades agrícolas e industriales, no requerirán de concesión de aguas.

6. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sus instituciones de gobierno o aquellas que ellos creen para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico serán susceptibles de los mismos beneficios establecidos para las comunidades organizadas en el presente artículo”. (Resaltado fuera del texto original)

En consecuencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en cumplimiento de lo allí dispuesto y, en concordancia con las funciones asignadas mediante el Decreto 3571 de 2011, construyó colectivamente la respectiva política en las materias de su competencia y, mediante el Decreto 960 de 2025, se expidió la Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico (PGCASB), definiendo un marco institucional propio, el reconocimiento de las comunidades organizadas para este propósito, y la configuración de instrumentos de fomento para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico.

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

De esta manera, el artículo 2.3.8.1.3. del Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, subrogado por el Decreto 960 de 2025, determina los principios que deben tener en cuenta las autoridades y entidades públicas, al momento de tomar decisiones, formular y adoptar planes, programas o proyectos y ejecutar acciones que se relacionen con la garantía de acceso al agua y el saneamiento básico entre los cuales se encuentra el agua como bien común y eje estructurante del territorio, la participación comunitaria incidente y el trato diferencial.

Igualmente, el artículo 2.3.8.1.4. *ibidem* contempla, entre otras, las siguientes definiciones:

“1. Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico (GCASB). Modelo de gestión en el que las comunidades se organizan de forma autónoma, solidaria y democrática para desarrollar acciones que faciliten los usos individuales y comunitarios del agua y el saneamiento básico en áreas rurales y urbanas, con el fin de promover niveles de vida dignos a través de la protección del agua y los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico, la prestación comunitaria de servicios públicos o la administración de sistemas de aprovisionamiento y la preservación de los valores culturales, ambientales y sociales de la comunidad.

2. Gestor Comunitario del Agua y el Saneamiento Básico (GC). Es la comunidad organizada en los términos del artículo 365 de la Constitución Política, constituida como persona jurídica u otras formas organizativas sin ánimo de lucro y de beneficio comunitario, en la que sus miembros están vinculados por lazos de vecindad, solidaridad y principios democráticos, y entre cuyas actividades se encuentran todas las relacionadas con la GCASB.


3. Sistemas de aprovisionamiento para el acceso universal al agua y el saneamiento básico. Solución alternativa a la prestación de los servicios públicos, conformada por un conjunto de condiciones organizativas, administrativas, técnicas y operativas que permiten el acceso al agua y el saneamiento básico. Estas soluciones se adaptan a las particularidades territoriales, socioeconómicas y culturales de las comunidades y de quienes los administran. Al no constituirse como servicio público, no están sujetas a la Ley 142 de 1994 y, en consecuencia, tampoco a la normativa que expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)”

Así mismo, el artículo 2.3.8.2.2. del referido Decreto 1077 de 2015, dispone que los GC (gestores comunitarios) que prestan servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, estarán sometidos a lo estipulado en la Ley 142 de 1994 o aquella que la complemente o modifique y, a las disposiciones ambientales y sanitarias vigentes. Igualmente, señala que los GC que administran sistemas de aprovisionamiento podrán definir autónomamente, entre otros aspectos, el manejo de las aguas residuales en el marco del reglamento técnico del sector y reglas sanitarias y ambientales aplicables.

Por otra parte y de acuerdo al concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio bajo número 13002026E3003555 de 19 de febrero de 2026, la redacción del inciso segundo del numeral cuarto del artículo 274, señala que las comunidades organizadas que cumplan con las condiciones allí previstas, por un lado, no requerirán presentar el PUEAA y, adicionalmente, elimina la autorización sanitaria como prerequisite para el otorgamiento de la respectiva concesión, sin que pueda entenderse que la condición de prerequisite aplica para el PUEAA, en primer lugar porque en la norma el calificativo de prerequisite se predica únicamente de la autorización sanitaria y en segundo lugar porque conforme a la normatividad vigente el PUEAA no tiene la condición de ser un prerequisite.

Complementariamente, teniendo en cuenta que en el año 2010, se expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), cuyo objetivo general es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la gestión y el uso eficiente y eficaz del agua, la cual tiene como uno de sus principios “la participación y equidad” bajo el cual se define que la gestión del agua se orientará bajo un enfoque participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores productivos y demás usuarios del agua, y se desarrollará de forma transparente y gradual propendiendo por la equidad social. Además, la referida Política plantea

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

dentro de sus objetivos el conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta, así como generar estrategias que orienten al fortalecimiento de las autoridades ambientales en la planificación, administración, monitoreo y control del recurso hídrico, al igual que generar estrategias que fomenten y desarrollen acciones para el manejo de la información relacionada con el recurso hídrico.

Ahora bien, en consideración a lo establecido en el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023, este Ministerio realizó mesas de trabajo durante los años 2024 y 2025, con las autoridades ambientales, gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico y otros actores interesados, en las que se identificaron retos e inquietudes respecto a la aplicación de los numerales 4° y 5° del artículo 274, considerando que el articulado otorga unos beneficios a los GC, pero de manera previa el proceso de concesión de aguas tiene su normatividad específica.

Dadas las consideraciones precedentes, es necesario reglamentar los numerales 4° y 5° del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023, con el fin de definir los criterios técnicos necesarios para que las autoridades ambientales en el marco de sus competencias y responsabilidades puedan aplicar las excepciones señaladas en los mencionados numerales en lo atinente a la concesión de aguas, el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH) y la definición del uso para la subsistencia de la familia rural de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el reúso de aguas y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) respecto de los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico, para contribuir a la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO

El presente decreto aplica para todo el territorio nacional y va dirigido a las autoridades ambientales competentes y a los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico.

3. VIABILIDAD JURÍDICA

3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo


El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política otorga al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa la facultad de: *“Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”*.

El artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 *“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de La Vida”*, instó a las entidades del Gobierno Nacional a expedir una Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico y reconoce a los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico como sujetos de la economía popular y comunitaria y actores clave en el propósito de ordenar el territorio alrededor del agua. De manera particular, establece una serie de lineamientos necesarios para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico que, en los numerales 4° y 5° se refieren a la concesión de aguas, el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH), el reúso de aguas y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), respecto de los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico.

En este contexto, es necesario reglamentar los numerales 4° y 5° del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023, con el fin de definir los criterios técnicos necesarios para que las autoridades ambientales en el marco de sus competencias y responsabilidades puedan aplicar las excepciones señaladas en los mencionados numerales. Lo anterior, implica la modificación y adición del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector Ambiente.

3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

Los numerales 4 y 5 del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 que se encuentra vigente (Diario Oficial No. 52.400 de 19 de mayo de 2023).

3.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas

En virtud de la presente reglamentación se adicionan los siguientes artículos:

- ARTÍCULO 2.2.3.2.6.5. Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico.
- ARTÍCULO 2.2.3.2.6.6. Proyectos de Reúso de agua por los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico.
- ARTÍCULO 2.2.3.2.6.7. Consideraciones para el uso del agua por los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico.

Así mismo, se modifican los siguientes artículos y título de una sección:

- ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA.
- ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas.
- El Título de la Sección 6 del Capítulo 2 del Título 3 del Decreto 1076 de 2015
- ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión
- ARTÍCULO 2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud.
- ARTÍCULO 2.2.3.4.1.1 Componentes del Registro.

3.4. Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción)

- **Sentencia C-741 de 2003 de la Corte Constitucional**

De acuerdo con esta Sentencia, las comunidades organizadas que el ordenamiento jurídico reconoce como sujetos habilitados para prestar servicios públicos son organizaciones colectivas con vocación solidaria y sin ánimo de lucro, cuyo régimen debe estar separado del aplicable a las empresas de servicios públicos. Al respecto, este tribunal sostuvo:


"Así lo entendió el Legislador en la Ley 142 de 1994, que al señalar que las 'organizaciones autorizadas' podían participar en la prestación de servicios públicos domiciliarios, las separó del régimen aplicable a las empresas de servicios públicos y de otras formas de organización, inspiradas principalmente por un interés empresarial. El desarrollo posterior de la Ley 142 (de) 1994 en materia de participación de las 'organizaciones autorizadas' en la de (sic) prestación de servicios públicos refleja la especificidad de este ánimo solidario. (...)

Una comunidad organizada mediante una forma diferente no es considerada empresa de servicios públicos domiciliarios.

(...) Una lectura sistemática de la Ley 142 de 1994, permite concluir que el artículo 17 regula sólo una de las formas bajo las cuales se pueden prestar servicios públicos domiciliarios, pero no incluye dentro de tal regulación ni a los municipios, ni a las entidades descentralizadas que adopten la forma de empresas industriales y comercia/es del Estado, ni mucho menos a "las organizaciones autorizadas". (...)"

En la misma providencia, se reconoce la importancia institucional de las comunidades organizadas en orden a asegurar la universalidad de los servicios públicos, en especial en aquellos entornos en los que no existe oferta empresarial o estatal de tales prestaciones. Sobre el particular, la Corte señaló:

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

"En el caso bajo estudio, la referencia a 'organizaciones autorizadas' que trae la Ley 142 de 1994 en su artículo 15.4, no permite concluir, prima facie, que bajo esta forma de organización se agrupen personas tradicionalmente marginadas. No obstante, en la práctica constituyen la principal alternativa a través de la cual sectores de la población tradicionalmente marginados y 'organizaciones autorizadas', pueden participar en la prestación de servicios públicos. Es a través de este tipo de organizaciones que estos sectores pueden superar las condiciones de marginación y participar activa y efectivamente en la vida económica y social del país".

- **Sentencia C-263/13 de la Corte Constitucional**

En esta sentencia, la Corte declaró exequible el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 según el cual "La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado", entendiendo que cuando la Corte se refiere a empresas, de conformidad con lo que dispone el artículo 3 de la citada Ley, se refiere a todos los prestadores de servicios públicos, incluidas, las comunidades organizadas. En este entendido, y con miras al cumplimiento de los objetivos previstos, entre otros, en los artículos 2, 3, 11, 73 y 74 de la citada Ley, se faculta a las Comisiones de Regulación para adoptar las referidas reglas de comportamiento diferencial a las comunidades organizadas, con lo cual se fijan límites teleológicos al ejercicio de dicha competencia.

3.5. Circunstancias jurídicas adicionales

No aplica

4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere)

No aplica. La iniciativa normativa no genera impacto económico, financiero, fiscal o administrativo, en la medida en que su cumplimiento se desarrolla en virtud del ejercicio misional de las autoridades ambientales competentes conforme a la Ley 99 de 1993.


5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere)

No aplica. La presente iniciativa normativa no requiere de viabilidad o disponibilidad presupuestal expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dado que no genera afectación presupuestal.

6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se requiere)

No se identifican impactos medioambientales, toda vez que la gestión comunitaria del agua se encuentra orientada hacia la promoción de niveles de vida dignos a través de la protección del agua y los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico, la prestación comunitaria de servicios públicos o la administración de sistemas de aprovisionamiento y la preservación de los valores culturales, ambientales y sociales de la comunidad.

Igualmente, no se consideran impactos sobre el patrimonio cultural de la Nación, ya que la presente iniciativa normativa no tiene injerencia sobre el mismo.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	MEMORIA JUSTIFICATIVA	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión jurídica	
Versión: 4	Vigencia: 25/11/2022	Código: F-A-GJR-07

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (incluye el análisis de la problemática existente, sustento técnico del proyecto de norma y bibliografía sobre el tema, esta última si existe)

Ver documento técnico de soporte DTS

ANEXOS:

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación en la agenda regulatoria (Firmada por el servidor público competente –entidad originadora)	(Marque con una x)
Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de conformidad)	(Marque con una x)
Informe de observaciones y respuestas (Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y grupos de interés sobre el proyecto normativo)	(Marque con una x)
Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los mercados)	(Marque con una x)
Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite)	(Marque con una x)
Otro: Documento técnico de soporte. (Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante o de importancia)	X

Aprobó:

LAURA CAMILA RAMOS DÍAZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica



OSCAR FRANCISCO PUERTA LUCHINI

Director de Gestión Integral de Recurso Hídrico

Formato tomado del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de lo reglamentado por medio del Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 371 de 2020.